

RUMANÍA

COMENTARIO GENERAL

Situación política

El Gobierno encabezado por Victor Ponta ha superado la primera moción de censura de la actual legislatura, presentada por la oposición demócrata-liberal, en relación con la situación de la planta química de Oltchim Rm.Valcea , una de las más importantes de Europa del Este. Los autores de la moción exigían la dimisión de los Ministros de Hacienda, Daniel Chițoiu, y de Economía, Varujan Vosganian, a quienes consideran responsables de la entrada de Oltchim en insolvencia, así como del estancamiento del proceso de privatización. Las deudas de la planta ascienden a cientos de millones de euros. El Gobierno intentó, el pasado otoño, vender el paquete mayoritario de acciones, pero la privatización fue un fracaso. Según miembros del Ejecutivo actual, los problemas de Oltchim son causados por la falta de responsabilidad por parte de los Gobiernos anteriores.

El Gobierno estudia un nuevo proyecto de ley sobre la restitución de las propiedades nacionalizadas por el régimen comunista, un asunto que no se ha solucionado desde hace 20 años. Antes del próximo 12 de abril, Rumanía deberá responder a una solicitud del Tribunal Europeo de Derechos Humanos para resolver este problema. El Tribunal, que ha recibido un alto número de reclamaciones presentadas por las personas que se consideran perjudicadas, advierte que en ausencia de una legislación compensatoria, analizará rápidamente estos expedientes y obligará al Estado rumano al pago de resarcimientos muy grandes. Hasta la fecha, el Estado rumano ha pagado indemnizaciones que ascienden a 5.000 millones de euros y debería pagar otros 16.000 millones. El Premier Ponta ha anunciado que desea que este proyecto de ley sea tramitado por el Parlamento por procedimiento de urgencia y que el Ejecutivo solucione este problema.

Conforme al nuevo proyecto, a los antiguos propietarios de las casas confiscadas por el régimen comunista que no pueden recibir sus propiedades, se les otorgarán puntos con un valor nominal de 1 leu, según el valor de la casa, con los que podrán adquirir a través de subastas, casas y terrenos agrícolas que el Estado sacará a la venta.

En junio, el Tribunal Constitucional de Rumanía tendrá una nueva composición. El jefe del Estado, Traian Băsescu, y las dos Cámaras del Parlamento de Bucarest han nombrado a los tres representantes del Tribunal Constitucional, quienes reemplazarán a los jueces cuyo mandato caduca. En los últimos años, esta institución se ha convertido en un actor importante del escenario político rumano, a causa de las numerosas denuncias de inconstitucionalidad contra varias normas estatales. El interés por la actividad del Tribunal y por sus miembros ha aumentado después de que esta institución interviniera el pasado en la lucha política en la que estuvieron implicados el Gobierno, representado por la Unión Social Liberal (una alianza de centro-izquierda) y la Oposición demócrata liberal (de derecha) que hizo tándem con el jefe del Estado, Traian Băsescu. Los tres jueces del Tribunal Constitucional de Rumanía que tomarán posesión en verano de sus cargos por un mandato de nueve años son Daniel Morar, Fiscal general en funciones y antiguo jefe de la Dirección Nacional Anticorrupción, propuesto y nombrado por el jefe del Estado, Valer Dorneanu y la actual ministra de Justicia, Mona Pivniceru, ambos nominados y validados por el Legislativo.

A su vez, El Primer Ministro, co-líder de la Unión Social Liberal, y Ministro interino de Justicia, ha afirmado que sus prioridades son: asegurar una reforma real de la Justicia, poner en marcha los nuevos códigos de procedimiento penal y, sobre todo, nombrar a los nuevos jefes de la Fiscalía General y de la Dirección Nacional Anticorrupción (DNA).

Estos nombramientos, que responden a una solicitud de la Comisión Europea, a través del último informe realizado en el marco del Mecanismo de Cooperación y Verificación en el sector de la Justicia, han suscitado polémicas duras en el escenario político rumano. Ponta ha enviado al Consejo Superior de Magistratura (CSM), la propuesta de nombrar a Laura Codruța Kovesi a la cabeza de la DNA y a Tiberiu Nițu, en la Fiscalía General. Pero los liberales, socios de los socialdemócratas en el Gobierno, consideran esta propuesta como inadecuada, porque en su opinión Laura Codruța Kovesi protege los intereses del jefe del Estado, Traian Băsescu. Este último ha afirmado que no permitirá intervención alguna en el proceso del nombramiento de los fiscales jefes. Según declara, los partidos políticos están cometiendo un gran error al intentar ejercer presiones y ofrecer soluciones para los nombramientos de estos cargos.

Por su parte, el Primer Ministro ha dicho que el procedimiento utilizado respeta la legislación actual y las recomendaciones de la Comisión Europea.

Las propuestas presentadas por el primer ministro han generado tensiones entre los miembros de la USL, alianza en el poder, cuyos dos principales pilares son el Partido Social Demócrata (PSD) y el Partido Nacional Liberal (PNL). Los liberales descontentos con el nombramiento hecho por el primer ministro para el cargo de Fiscal Jefe de la Dirección Nacional Anticorrupción renuncian a la posibilidad de nombrar al futuro Ministro de justicia. El líder del PNL, Crin Antonescu, afirma que los liberales lo volverán a asumir, si el primer ministro renuncia a sus propuestas.

Sin embargo, es difícil creer que Ponta renuncie a los nombres propuestos para asumir la jefatura de la Fiscalía General y la Dirección Nacional Anticorrupción. Los candidatos comparecerán ante el CSM a finales del próximo mayo; al final, también deberán recibir el visto bueno por parte del presidente Traian Basescu.

Situación económica

Aunque la recesión haya afectado a gran parte de los países de la Unión Europea en 2012, la economía de Rumanía creció el año pasado más de lo estimado, según anuncia el Instituto Nacional de Estadística (INE). Conforme a los datos provisionales, el año pasado la economía aumentó en un 0,7%. El INE explica que el aumento de la economía del año pasado se debe a una evolución mejor de la industria y el comercio.

Si las previsiones del INE señalaban una disminución de la contribución de la industria en el PIB en un 0,6%, sin embargo ésta bajó sólo un 0,2%. Asimismo, en la versión inicial de los datos, el comercio no registraba crecimiento el año pasado frente al 2011, pero los datos provisionales indican un incremento en un 0,2%. Conforme al INE, la economía de Rumanía totalizó el año pasado casi 590 mil millones lei, el equivalente a 132 mil millones de euros. “El crecimiento económico es mayor de lo previsto inicialmente, pero menos de lo que hubiéramos deseado debido a la catástrofe en la agricultura y a la sequía. Somos el único país de la región con crecimiento económico en 2012 y es importante que en 2013 sigamos la misma dirección”, ha apreciado el primer ministro Victor Ponta.

Ponta ha vuelto a afirmar que los datos relativos al primer trimestre indican que Rumanía respeta los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea y el Banco Mundial. En 2011, Rumanía registró crecimiento económico del 2,2% tras una contracción de un 1,1% en 2010.

También la Oficina Europea de Estadística publicó una serie de datos. Conforme a Eurostat, la tasa anual de la inflación en la zona euro sigue disminuyendo, alcanzando un 1,7% el pasado mes de marzo. La inflación en la eurozona baja por el tercer mes consecutivo. Las cifras publicadas por Eurostat indican que la disminución de la inflación se debe principalmente a la reducción de los precios en energía. El pasado mes de febrero, Rumanía registró la mayor tasa

anual de inflación de los 27 estados miembros de la Unión, el 4,8%, teniendo en cuenta que en la zona euro así como en la UE, dicha tasa no superó el 2%.

Según los datos hechos públicos por el Gobierno sobre los resultados económicos registrados por Rumanía en el primer trimestre de este año, las exportaciones han aumentado en un 8% y se ha registrado el menor déficit de la balanza comercial de los 10 últimos años, alrededor de 200 millones de euros. De esta manera Rumania logra el objetivo de déficit trimestral establecido con el FMI. En los dos primeros meses ha aumentado también la producción industrial, en un 4,6% y los ingresos fiscales han crecido en un 10% frente al mismo período del año anterior, en el caso del IVA, impuestos especiales y el impuestos sobre la renta.

En cambio, según ha subrayado el mismo Primer Ministro Victor Ponta al presentar dichos datos, las malas noticias se relacionan con una importante baja de los ingresos en lo que atañe al impuesto de sociedades. En opinión del jefe del Gobierno, se tiene que modificar la ley de la insolvencia, porque numerosas compañías no han asegurado un flujo de crédito y no logran cumplir con las obligaciones asumidas con el presupuesto estatal y ante otros suministradores. En semejantes situaciones, dichas compañías entran en insolvencia de mala fe, y dejan de pagar impuesto alguno, a diferencia de las demás empresas que llevan una vida normal en el mercado económico.

Ponta ha declarado que el Ejecutivo tiene que ajustar la Ley de la Insolvencia para ayudar a las empresas que están de verdad en insolvencia y sancionar, por otra parte, a las compañías que entran de manera fraudulenta en este proceso. Con respecto a la privatización de las Compañías de las Vías Férreas y Transgaz, Victor Ponta ha precisado que existe una sobresuscripción importante que representa una señal de confianza y de potencial de desarrollo. El jefe del gobierno ha añadido que la actual disciplina presupuestaria se podría acentuar en los próximos meses y que ella representa la garantía de que la economía rumana puede seguir creciendo.

Por otra parte, el Primer Ministro pretende implantar una tasa de solidaridad del 10%, recaudada de los empleados del sistema público, cuyos salarios son mayores de mil euros.

A su vez, el PNL, socio del PSD en el Gobierno, se opone rotundamente a cualquier impuesto extra, o crecimiento del sistema fiscal. El líder liberal, Crin Antonescu, declara que esta tasa no conllevaría al presupuesto estatal ingresos sustancialmente mayores. Los resultados económicos positivos han sido registrados por Rumanía en un contexto en que la recesión económica mundial continúa. Una conclusión del más reciente informe del FMI destaca que ésta podría ser superada a raíz del crecimiento económico de los países con ingresos bajos. Rumanía podría diversificar sus relaciones económicas dado que los países desarrollados prevalentes en el comercio exterior rumano están estancados. En opinión de los analistas, la extensión de las relaciones económicas hacia los países de Asia y África, podría impulsar el auge económico de Rumania.

Situación social

La situación de Oltchim Râmnicu-Vâlcea (sur de Rumanía), uno de los principales combinados químicos del Sudeste de Europa, se mantiene insegura y complicada. El año pasado, la subasta organizada para vender el paquete mayoritario de acciones fue adjudicada a Dan Diaconescu, el líder de un partido populista y dueño de un canal de televisión. Sin embargo, Diaconescu no tomó posesión de las acciones, dado que no pudo pagar al Estado los 45 millones de euros que prometió pagar. Desde entonces, las cosas se han deteriorado constantemente y estos últimos meses se han visto marcados por las protestas de los empleados descontentos por no haber recibido los sueldos los últimos tres meses y por la falta de una estrategia de rescate de esta planta.

Oltchim no puede contar con una ayuda estatal porque no lo permite la Comisión Europea alegando que el combinado había recibido anteriormente este tipo de ayuda. Esto es lo que ha

transmitido el primer ministro, Victor Ponta, quien declara que ahora el Gobierno está intentando conseguir financiación de los bancos y de los clientes de la planta para cubrir los gastos con los activos operativos del combinado. Mientras, más de mil empleados serán despedidos y otros 300 entrarán en paro técnico. La medida de los despidos se ha adoptado a causa de los ahorros solicitados por los financiadores de Oltchim, y también por sus socios de negocios – según ha declarado el administrador judicial Gheorghe Piperea quien ha recordado que se deberán ahorrar mensualmente, al menos dos millones de euros.

Esta acción ha sido calificada de ilegal por los sindicatos. El líder del Sindicato de Oltchim, Mihai Diculoiu, declara que no se le ha notificado esta medida de los despidos y amenaza con organizar protestas incluso en Bucarest.

El administrador judicial de Oltchim, Gheorghe Piperea, contradice al líder sindical y afirma que llevan ya tres semanas debatiendo con todos los interesados el asunto de los despidos. Después del fracaso del año pasado, el Estado ya no ha establecido ningún plazo concreto para la privatización de este combinado químico y ningún inversor se ha mostrado interesado.